

Santiago, veintiséis de noviembre de dos mil trece.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos octavo a duodécimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que se ha deducido la presente acción constitucional en representación de la sociedad Agrícola María Elba Herrera Limitada en contra de la empresa Patagoniafresh S.A. y otras personas que resulten responsables de la contaminación del Estero del Cerro o Santelices. Explica la recurrente que todos los años, en la temporada de cosecha de fruta, el referido canal sufre una alta contaminación pues sus aguas arrastran sedimentos que perjudican los equipos de riego y emana un olor nauseabundo producto de los residuos que son arrojados a él, por lo que la utilización de las aguas en labores de riego y bebederos de animales es peligrosa.

En este contexto señala que el hecho ha sido denunciado reiteradamente ante las autoridades sanitarias, quienes han sancionado a la recurrida por verter riles sin tratar al cauce del estero San Antonio, que alimenta al Estero Carretón y al Estero Carretones, el que es a su vez afluente del Estero del Cerro. Las mismas autoridades han detectado irregularidades respecto de otras tres empresas que individualiza. Es por lo anterior que señala que no se

puede descartar la participación de éstas u otras empresas del sector.

Señala que es dueña del predio que individualiza y de 87 acciones del Estero Carretones. El referido predio es arrendado a otras cuatro sociedades, en cuyo nombre también se recurre, quienes desarrollan actividades económicas en que la utilización del recurso hídrico es indispensable, por lo que la contaminación del canal afecta las garantías constitucionales consagradas en los numerales 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que se debe destacar que el arbitrio intentado se tuvo por interpuesto en contra de Patagoniafresh S.A, Empresa Sebastián Astaburuaga y Cia S.A., Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Aguas Nuevo Sur y RR Wine, según consta en resoluciones de fojas 69 y 85.

Tercero: Que las referidas sociedades solicitaron el rechazo del recurso señalando, en síntesis, que es extemporáneo puesto que es el recurrente quién señaló que la contaminación se produce desde el año 2003.

Además indican que este arbitrio debe ser desestimado por cuanto carece de la determinación necesaria exigida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En este punto aducen que en la acción no se señala con precisión quien es el causante de la contaminación,

interponiéndola como una verdadera querella, sin que se indique tampoco cual sería la causa o elemento contaminante.

Por otro lado, afirman que no son las causantes de la contaminación que experimenta el canal del Cerro y el Estero Carretones puesto que para el desarrollo de su actividad cada una cuenta con la respectiva Declaración de Impacto Ambiental, la que fue oportunamente aprobada por la autoridad ambiental quien calificó favorablemente los proyectos presentados. Es en estos instrumentos ambientales donde se establecen las condiciones que deben cumplir para el desarrollo de su actividad en relación al tratamiento de los residuos industriales líquidos en el caso de Patagoniafresh S.A., Empresa Sebastián Astaburuaga y Cia S.A. y RR Wine. Afirman que la actividad desplegada ha sido evaluada desde la perspectiva ambiental y que en el desarrollo de la misma se han ajustado plenamente a la normativa ambiental que la regula.

Cuarto: Que por requerimiento de los jueces de primera instancia informan la Junta de Vigilancia del Estero Carretón, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule.

La primera entidad manifestó que es efectivo que el Estero Carretón en ocasiones, en especial desde febrero a mayo de cada año transporta gran cantidad de sólidos que

afectan los equipos de riego y eventualmente el proceso de descomposición genera malos olores. Ello se debe a que el caudal aumenta con aguas provenientes de procesos industriales que se encuentran en tres situaciones: a) aguas tratadas que cumplen con el Decreto Supremo N° 90; b) aguas tratadas que no cumplen con el mencionado decreto; y c) emisiones clandestinas. Puntualiza que el cuerpo de agua del estero no es capaz de diluir los vertidos industriales, provocando la situación descrita por la recurrente.

Por otro lado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios señala, escuetamente, que en el periodo que va desde enero 2011 a noviembre 2012 ha recibido una serie de denuncias por descargas de aguas residuales al Estero Carretones, que ha fiscalizado y que sólo ha sido sancionada Patagoniafresh S.A. al constatarse en su planta el escurrimiento de RIL sin tratar hacia el cauce del mencionado estero iniciándose un proceso sancionatorio que culminó con la imposición de una multa de 240 U.T.M. También indica que en contra de esta empresa se inició en diciembre de 2012 un nuevo proceso sanitario porque el resultado del programa de autocontrol y del control directo efectuado arrojó incumplimiento a la normativa.

Finalmente, el Seremi de Salud de la Región del Maule se limita a adjuntar dos oficios, ambos del año 2005, donde el Director del Hospital Base -Oficina de Salud del Ambiente- de Curicó y de Molina da respuesta a la Seremi de

Salud y al Alcalde de Molina, respectivamente, por la denuncia de la recurrente de autos. Señalan que la contaminación del Estero Carretón y Canal Carretones estaba siendo investigada por una comisión de servicios públicos.

Quinto: Que es un hecho cierto que el Estero Carretón experimenta, en la temporada que corre desde febrero a mayo de cada año, una alta contaminación, la que se produce porque las empresas del sector vierten a sus aguas clandestinamente residuos industriales líquidos sin tratar o porque las empresas que cuentan con la respectiva planta de tratamiento de aguas funcionan defectuosamente, incumpliendo la normativa establecida en el D.S N° 90 y la Resolución de calificación ambiental que aprueba su funcionamiento. En efecto, todos los antecedentes dan cuenta de la existencia de la contaminación, la que no es negada por las empresas recurridas, puesto que niegan ser las causantes de la misma, mas no su existencia.

Sexto: Que asentado lo anterior cabe, en primer término, rechazar la alegación de extemporaneidad puesto que el artículo 20 de la Carta Fundamental permite interponer la presente acción constitucional a quien por causa de actos u omisiones ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales que menciona. En este sentido, la actora al interponer el recurso en febrero del año 2013 lo que buscó fue impedir -sin éxito- que la

contaminación que se evidencia en la temporada que corre desde febrero a mayo de cada año se produjera, ello porque existía una amenaza cierta de que la situación se reiterara nuevamente en el año 2013, lo que en la especie ocurrió.

Séptimo: Que, seguidamente, corresponde desestimar las alegaciones respecto de la indeterminación del recurso, cuestión que, a juicio de los recurridos, motivaría el rechazo de la acción. En efecto, si bien el artículo 20 inciso segundo de la Constitución Política de la República puntualiza que en el caso del N° 8 del artículo 19 procederá la acción cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada, lo cierto es que en la especie ese requisito se cumple a cabalidad, pues la acción se ha dirigido en contra de cuatro empresas que se individualizan y además se ha solicitado informe al Seremi de Salud de la Región del Maule y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No obsta a tal conclusión la circunstancia de haber hecho presente la actora que no tenía la certeza de que sean efectivamente éstas empresas las que contaminan, pues sólo podía presumirlo por el resultado de las pocas actuaciones desplegadas por la autoridad sanitaria. Lo que expone resulta lógico, toda vez que, incluso hoy, lo único cierto es que las aguas están contaminadas.

Por otra parte no es factible rechazar el arbitrio porque la actora afirme que desconoce el origen de la contaminación, puesto que no puede exigirse a un particular que señale con certeza cuáles son las sustancias que producen la contaminación, pues es la autoridad sanitaria quien debe determinar qué tipo de elementos son los que la provocan, ello sin perjuicio de consignar que en el caso de autos la actora ha señalado concretamente que la contaminación se produce porque se vierten al cauce del Estero Carretón residuos industriales líquidos (RIL), por parte de empresas agroindustriales del sector.

Octavo: Que despejado lo anterior, se debe señalar que en estos autos no existen antecedentes suficientes para imputar a las empresas recurridas la autoría de la contaminación del Estero Carretón; sin embargo, ello no es óbice para que esta acción pueda prosperar. En efecto, esta Corte, que está llamada a cautelar los derechos fundamentales que se denuncian vulnerados, no puede conformarse con un análisis limitado respecto de las empresas contra quienes se recurre, pues en el caso concreto se ha consignado que la contaminación existe. La misma inequívocamente se produce todos los años en la temporada que corre desde febrero a mayo, sin que las autoridades sanitarias encargadas de velar porque esta situación no se concrete, esto es, el Seremi de Salud y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, informaran de

medidas concretas y fiscalizaciones específicas que den cuenta de la actividad desplegada para evitar que esta situación se produzca.

Noveno: Que lo anterior es relevante, puesto que habiendo sido requeridas ambas autoridades para que informaran al tenor del recurso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios se limitó a señalar que existían múltiples denuncias desde el año 2011, afirmando que fiscalizó; no obstante no señala cuándo ni a quiénes, sin documentación que respalde su afirmación. Sólo adjunta las actas de una fiscalización llevada a cabo en abril de 2011 respecto de Patagoniafresh S.A. y la respectiva resolución de 27 de junio de 2012 que le impone una multa de 240 U.TM por verter RIL sin tratar al cauce del Estero San Antonio, que desemboca en el Estero Carretón, agregando que se inició otro procedimiento el 27 de diciembre de 2012. Nada dice respecto de las otras empresas ni tampoco señala haber fiscalizado antes del año 2011, en circunstancias que en estos autos consta que la recurrente viene denunciando la contaminación de que se trata desde el año 2005 -fojas 1, 224 y 225- y que las empresas recurridas cuentan con Resoluciones de Calificación Ambiental desde el año 2006, en las que se aprueban las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental que establecen las condiciones de tratamiento de los RILES que producen las mismas en sus

procesos productivos, lo que necesariamente debió ser fiscalizado por la autoridad.

En tanto, el Servicio de Salud nada informa. Acompaña dos oficios, que dan cuenta de que ya en el año 2005 existía una grave contaminación de las aguas del Estero Carretón, sin que siquiera señale si ha realizado desde esa época algún tipo de fiscalización para determinar sus causas, ni menos aún que se hayan adoptado las medidas que en conformidad a la ley está obligado a llevar a cabo para impedir que ello siga ocurriendo.

Décimo: Que, por lo expuesto, resulta imperioso adoptar las medidas que aseguren que las autoridades administrativas cumplan la labor que les ha sido encomendada y fiscalicen a todas las empresas del sector del Estero Carretón, para efectos de determinar quiénes son las personas o empresas que contaminan o que vierten RIL clandestinamente, como también aquellas que realizan imperfectamente el proceso de tratamiento de los mismos sin cumplir con el Decreto Supremo N° 90.

Undécimo: Que, por otro lado, en estos autos se han acompañado fotografías que -según afirma la recurrente- dan cuenta de que desde la empresa RR Wine se vierten aguas contaminadas a través de un tubo -fojas 260-. Sin embargo, asegura la empresa aludida que éste corresponde a un sistema de evacuación de aguas lluvias. Pues bien, tal afirmación debe necesariamente ser esclarecida por la

autoridad a cargo, esto es, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por imponerlo así el principio preventivo que debe inspirar las decisiones que adopte la autoridad respecto de las acciones que pueden impactar de manera negativa en el patrimonio ambiental del país, principio que ha sido consagrado normativamente en la Ley N° 19.300, cuyo texto fue enviado al Congreso Nacional precedido de un mensaje presidencial que expresamente alude al mismo. Este principio busca evitar el deterioro o la generación de daños en el medioambiente, así basta que exista la posibilidad de sufrir -el medioambiente- un perjuicio importante, la alteración o el agravamiento de una determinada situación, para obligar a las autoridades a actuar, pues persigue que los riesgos advertidos sean considerados y se adopten respecto de ellos las medidas pertinentes.

Lo mismo ocurre con la situación de que da cuenta la fotografía de fojas 422, pues la mencionada Superintendencia debe constatar si el agua que se conduce a través de la canaleta artificial corresponde a aguas que han sido previamente tratadas cumpliendo las exigencias de la Declaración de Impacto Ambiental y la normativa vigente.

Duodécimo: Que conforme a lo expuesto resulta que el problema denunciado, esto es la contaminación de las aguas del Estero Carretón es efectiva, por lo que la recurrente -conjuntamente con los vecinos del sector- no cuenta, entre

los meses de febrero a mayo, con agua libre de contaminación que pueda ser utilizada en sus actividades agrícolas, debiendo soportar, además, durante esa temporada la pestilencia del referido canal, por lo que no sólo se afecta su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sino que se pone en riesgo su salud física y mental, por lo que se vulneran las garantías constitucionales de los mismos consagradas en los números 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, circunstancias que ameritan otorgar la protección solicitada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se **revoca** la sentencia apelada de veintisiete de agosto de dos mil trece, escrita a fojas 598, y **se acoge sin costas**, el recurso interpuesto en lo principal de fojas 51, solo en cuanto **se declara** que la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule deberán adoptar a la brevedad las medidas tendientes a que cese en forma definitiva la contaminación que afecta al Estero Carretón, Estero Carretones y al Canal del Cerro, ordenándose, específicamente a la primera institución señalada:

a) Fiscalizar cada dos meses a todas las empresas del sector aledaño al Estero Carretón y al Estero Carretones

para determinar si cumplen con la legislación ambiental y sanitaria.

b) Concurrir a las instalaciones de la empresa RR Wine y verificar si a través del tubo cuya fotografía rola a fojas 261 sólo se vierten aguas lluvias. Asimismo comprobará si el sistema de canalización que se aprecia en la fotografía de fojas 422 corresponde a aquel incluido en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por Resolución N° 373 del año 2006.

c) Intensificar las fiscalizaciones a las propiedades aledañas al Estero Carretón, al Estero Carretones y al Canal del Cerro o Santelices a una constitución mensual en la temporada que va desde febrero a mayo de cada año para impedir que se produzca la contaminación de las aguas que escurren por ellos.

Las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades administrativas serán informadas semestralmente a la Corte de Apelaciones de Talca.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Prieto.

Rol N° 7844-2013.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Héctor Carreño S., Sr. Lamberto Cisternas R., Sra. Gloria Ana Chevesich R. y el Abogado Integrante Sr. Alfredo Prieto B. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar en comisión de servicios y el Ministro señor Cisternas por estar con permiso. Santiago, 26 de noviembre de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veintiséis de noviembre de dos mil trece, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.